

El Sistema Educativo Mexicano: una perspectiva propositiva hacia 2030

The Mexican Educational System: a propositional perspective towards 2030

 Leslfe Serna Hernández¹

Resumen: El texto analiza los desafíos estructurales y propone acciones estratégicas hacia un sistema educativo inclusivo y de calidad en México, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se abordan temas como calidad, equidad, formación docente, digitalización evaluación y gobernanza, destacando el impacto de la pandemia. Basado en propuestas de la UNESCO, el texto enfatiza la necesidad de un esfuerzo colectivo para transformar la educación en un motor de desarrollo sostenible y justicia social.

Palabras clave: Brecha digital, calidad de la educación, educación inclusiva, educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible, evaluación de la educación, igualdad de oportunidades, reforma de la educación.

Abstract: This text examines the structural challenges of the Mexican educational system and proposes strategic actions aimed at fostering an inclusive and high-quality education framework aligned with the Sustainable Development Goals. It addresses issues such as quality, equity, teacher training, digitalization, evaluation, and governance, emphasizing the impact of the pandemic. Drawing on UNESCO's proposals, the text underscores the need for a collective effort to transform education into a driver of sustainable development and social justice.

Keywords: Digital divide, quality of education, inclusive education, global citizenship education, education for sustainable development, educational assessment, equal opportunities, educational reform.

Fecha de recepción: 05 de julio de 2024

Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2024

Forma de citar: Serna, L. (2025). El Sistema Educativo Mexicano: una perspectiva propositiva hacia 2030. *Voces de la educación* 10 (19), pp. 41-69 .



Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

¹ Consultora independiente, email: lserna@valora.com.mx

El Sistema Educativo Mexicano: una perspectiva propositiva hacia 2030

En la última década, la educación en México ha enfrentado muchos desafíos y transformaciones significativas, influenciadas en gran medida por cambios políticos y administrativos. Hemos visto variaciones en las prioridades y en las políticas implementadas, algunas más alineadas y otras menos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.

Conforme nos acercamos al 2030, año acordado para la evaluación de los progresos hacia estos objetivos globales, constatamos que México se encuentra en un momento clave para redirigir y fortalecer sus esfuerzos. Los avances hacia las metas del ODS 4 han sido desiguales, destacando la necesidad de intensificar acciones en áreas como la equidad, la inclusión y la calidad educativa.

Frente al cambio de administración y en el contexto de la clausura de la Agenda 2030, la UNESCO México consideró una serie de acciones concretas para sugerir al gobierno entrante, en el documento denominado *Transformar la educación para lograr el desarrollo sostenible y un futuro de paz, justicia y prosperidad. Visión y propuestas para México 2024-2030*. En este artículo discutimos algunas de estas propuestas. Cabe señalar que lo aquí expresado no representa el punto de vista de la UNESCO, si bien la discusión abreva de algunos de sus principales planteamientos.

La visión de la UNESCO para el sistema educativo mexicano se fundamenta en un nuevo contrato social para la educación, que reconoce la necesidad de adaptar las prácticas educativas a un mundo cada vez más complejo e interconectado. Este contrato social enfatiza la importancia de construir futuros sostenibles a través de la educación, considerando las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo (UNESCO, "Los futuros de la educación", 2021).

El nuevo contrato social para la educación

El nuevo contrato social para la educación propuesto por la UNESCO representa un cambio en nuestra comprensión del propósito y la práctica educativa en el siglo XXI. Se trata de un marco que reconoce que los desafíos globales actuales, desde el cambio climático hasta la desigualdad social, requieren una revisión de cómo educamos a las generaciones presentes y futuras.

El primer principio, que establece el derecho universal a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, va más allá de la visión tradicional de la educación como algo limitado a la infancia y juventud. Este enfoque reconoce que las personas necesitan

oportunidades de aprendizaje y actualización a lo largo de su vida. Esto implica crear sistemas educativos flexibles que respondan a las necesidades de aprendizaje en diferentes etapas de la vida.

La concepción de la educación como bien público y común enfatiza que no debe ser tratada como una mercancía, sino que reconoce y reivindica el enfoque de derechos. Este principio destaca la responsabilidad colectiva para proveer oportunidades educativas de calidad para todas y todos, independientemente de su condición socioeconómica.

La pedagogía basada en la cooperación y la solidaridad representa un reforzamiento respecto a los modelos individualistas más tradicionales. Este enfoque promueve el aprendizaje colaborativo, el diálogo intercultural y el desarrollo de habilidades sociales fundamentales para la construcción de sociedades más cooperativas y participativas.

El aprendizaje ecológico e intercultural reconoce la interdependencia entre los seres humanos y el planeta, así como la riqueza de la diversidad cultural. Esta dimensión es particularmente relevante en el contexto mexicano, donde la diversidad lingüística y cultural representa al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para enriquecer los procesos educativos.

La evaluación como herramienta de mejora continua plantea un cambio en cómo medimos el éxito educativo. En lugar de enfocarse exclusivamente en resultados cuantitativos, este principio promueve una evaluación que considere el desarrollo integral de cada estudiante y la capacidad del sistema en su conjunto para mejorar, tomando decisiones con base en evidencia.

En el contexto mexicano, la implementación de estos principios enfrenta desafíos significativos. La persistente desigualdad socioeconómica limita el acceso a oportunidades educativas de calidad, mientras que la brecha digital profundiza las diferencias entre quienes tienen acceso a medios digitales y quienes no lo tienen. La diversidad cultural y lingüística del país requiere enfoques educativos flexibles y culturalmente sensibles.

Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades en la medida que la actual anterior y actual administración coinciden, en lo general con los principios planteados. Por otro lado, la integración de tecnologías y la creación de sistemas de evaluación inclusivo pueden contribuir a la realización de los principios del nuevo contrato social educativo.

La transformación propuesta por la UNESCO requiere un compromiso activo de todos los actores sociales: gobierno, instituciones educativas, docentes, estudiantes y comunidades. Solo a través de un esfuerzo colectivo y coordinado se podrá avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, inclusivo y capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.

Dimensiones clave

Calidad y pertinencia “hasta que se haga costumbre”

Si bien estos son temas y discusiones recurrentes en el sistema educativo, la pandemia de COVID-19 transformó el panorama educativo en el mundo, y México no fue la excepción, dejando secuelas que requerirán años de trabajo para ser superadas, particularmente en las generaciones afectadas. La pérdida de aprendizaje debido a los cierres escolares durante la pandemia ha sido significativa. Según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos, se estima que la recuperación del aprendizaje perdido podría tardar hasta 11 años en algunos contextos (OEI, 2021). Este informe destaca la gravedad del impacto de la pandemia en la educación y subraya la necesidad de estrategias efectivas para mitigar estas pérdidas.

Además, un informe conjunto del Banco Mundial, UNESCO y UNICEF titulado "El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación" estima que las pérdidas de aprendizaje debido a la COVID-19 podrían costarle a la generación de estudiantes actual unos 17 billones de dólares en ingresos futuros (Banco Mundial, 2021). El informe también menciona pérdidas significativas en matemáticas y lectura en varios países, incluyendo México, lo que resalta la urgencia de implementar medidas para recuperar el aprendizaje perdido.

En el campo de la calidad de la educación, las desigualdades educativas, ya significativas antes de la pandemia, se han profundizado de manera alarmante. El Banco Mundial (2024) ha documentado cómo los estudiantes de zonas rurales perdieron significativamente más días de clase efectivos que sus contrapartes urbanas, mientras que las comunidades indígenas experimentaron períodos prolongados de desconexión total del sistema educativo. El impacto económico en las familias de bajos recursos ha sido severo, reportando que los gastos adicionales en tecnología para la educación a distancia llegaron a representar hasta un tercio de sus ingresos mensuales, una carga económica que puso en dificultades a los hogares y a la continuidad educativa de muchos estudiantes.

En ese contexto, parece necesario revisar los cambios curriculares implementados en el sexenio anterior para asegurar que los aprendizajes fundamentales de lengua y matemáticas ocupen un lugar central en la educación. Aunque la metodología de proyectos ha aportado aspectos positivos, es crucial garantizar que las y los estudiantes adquieran competencias básicas sólidas en estas áreas esenciales. La priorización de lengua y matemáticas no solo fortalece las habilidades cognitivas básicas, sino que también sienta las bases para el aprendizaje continuo y el desarrollo integral. Para reducir las brechas de conocimiento, es necesario equilibrar la innovación pedagógica con un enfoque riguroso en los aprendizajes fundamentales.

La dimensión socioemocional de la crisis educativa no puede ser subestimada. La UNICEF ha documentado un incremento sin precedentes en problemas de salud mental entre los estudiantes, con cerca de la mitad reportando síntomas de ansiedad y más de un tercio manifestando sentimientos de depresión. Esta crisis emocional se ve agravada por la preocupación generalizada sobre el futuro académico, expresada por más del 60% de los estudiantes. Estos datos sugieren que cualquier estrategia de recuperación educativa deberá incorporar un fuerte componente de apoyo psicosocial. Esta es una dimensión que sin embargo está ausente del plan de estudios federal. Los esfuerzos que se realizan sus iniciativas estatales que no cuentan con una orientación nacional. La reintegración de los logros relacionados con habilidades socioemocionales es indispensable.

La transformación digital con visión humanista representa otra dimensión crucial de la calidad educativa. El Plan Sectorial de Educación 2020-2024 propuso aprovechar las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales, pero la implementación ha enfrentado desafíos significativos. Datos de la SEP (2024) indican que el 52% de las zonas rurales carece de acceso a internet e infraestructura tecnológica suficiente. No es posible construir una república científica, como se anuncia, si desde las escuelas públicas no se cuenta con la ventana clave que permite acceder al conocimiento científico actualizado: la conectividad a internet y los recursos digitales necesarios para la investigación y el aprendizaje. Pero no sólo se trata de la dotación de infraestructura, sino de la necesidad de una política educativa clara sobre el rol de la tecnología en las escuelas. Las distintas iniciativas de sexenios anteriores, todas ellas costosas y fallidas, han sido remplazadas por un vacío de políticas.

Equidad, inclusión y grupos vulnerables

La búsqueda de la equidad y la inclusión en el sistema educativo mexicano representa uno de los mayores desafíos. En la administración saliente, y en la actual, la intención de lograr la equidad se ha materializado, sobre todo, en las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que según datos de la SEP (2024), han alcanzado una cobertura sin precedentes al beneficiar a más de 23 millones de estudiantes.

Sin embargo, cuando analizamos en profundidad la situación educativa del país, encontramos que las disparidades continúan. Los datos del INEGI (2023) revelan una realidad preocupante en estados como Guerrero y Chiapas, donde los indicadores educativos continúan siendo significativamente más negativos que el promedio nacional. Esta situación refleja la persistencia de desigualdades estructurales que van más allá del ámbito puramente educativo.

La pandemia ha expuesto y exacerbado estas desigualdades. El abandono escolar de casi un millón de estudiantes del sistema educativo durante este período representa no solo

una crisis inmediata sino también un desafío generacional. Este fenómeno ha afectado sobre todo a las comunidades más vulnerables, profundizando las brechas educativas existentes.

Las recomendaciones de diversos organismos y actores subrayan la importancia crucial de incrementar la inversión en educación indígena y bilingüe. Esta inversión no solo es necesaria para atender la diversidad étnica y lingüística del país, sino que también representa un reconocimiento del valor intrínseco de las culturas y lenguas indígenas en el país.

Para que estas iniciativas tengan un impacto real y sostenible, es fundamental asegurar no solo recursos financieros adecuados sino también un acompañamiento pedagógico consistente en todos los niveles educativos. Este acompañamiento debe incluir la formación continua de docentes, el desarrollo de materiales educativos culturalmente pertinentes y la implementación de metodologías pedagógicas inclusivas que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad.

La transformación hacia un sistema educativo verdaderamente equitativo e inclusivo requiere un compromiso sostenido y coordinado de todos los actores sociales, desde las instituciones gubernamentales hasta las comunidades locales. Solo a través de este esfuerzo colectivo podremos avanzar hacia una educación que no solo reconozca, sino que celebre y potencie la diversidad de nuestra sociedad.

El abordaje de la pobreza y exclusión educativa requiere reconocer la interseccionalidad entre pobreza, etnicidad y acceso a la educación. Los datos del CONEVAL indican que el 7.1% de la población vive en pobreza extrema, con una sobrerrepresentación de la población indígena (65.2%), lo que demanda estrategias diferenciadas.

La dimensión territorial y étnica de esta exclusión es notable: en zonas rurales, el porcentaje se eleva al 23.4%, y entre la población indígena alcanza el 26.7%. Los datos del CONEVAL también señalan que el 65.2% de la población en pobreza extrema es indígena, lo que refleja la intersección entre pobreza, etnicidad y exclusión educativa.

Las investigaciones del Banco Mundial demuestran que los programas universales de transferencias monetarias tienen un impacto limitado en la movilidad social intergeneracional, con retornos sobre la inversión bastante menores respecto a los programas focalizados en poblaciones vulnerables. La evidencia sugiere que la inversión en programas focalizados, aunque más compleja de implementar inicialmente, muestra mayor efectividad en términos de costo-beneficio y un impacto más sostenible en la reducción de la desigualdad educativa. UNICEF ha documentado que los programas que combinan apoyo económico con intervenciones complementarias logran resultados superiores, alcanzando incrementos del

45% en la tasa de conclusión de educación media superior en comunidades indígenas, comparado con un 12% en programas universales.

Por otra parte, datos recientes del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2024) revelan una realidad que preocupa: 30% de las y los jóvenes no superan la escolaridad de sus padres, perpetuando ciclos intergeneracionales de desigualdad. De acuerdo con datos recientes del CONEVAL (2022), el porcentaje de jóvenes de 15 a 21 años que no estudian ni trabajan es del 19.8%, lo que representa aproximadamente 2.2 millones de personas. Este fenómeno muestra diferencias significativas por género: las mujeres representan el 67.3% de esta población.

Para maximizar la efectividad de las estrategias que combaten la pobreza al mismo tiempo que mejoran el acceso, permanencia y calidad de la educación se requiere:

- La implementación de criterios de focalización precisos que consideren múltiples dimensiones de vulnerabilidad.
- El desarrollo de sistemas de monitoreo que permitan ajustes según las necesidades cambiantes.
- La combinación de apoyos económicos con intervenciones complementarias como tutoría académica y apoyo psicosocial.
- La coordinación interinstitucional para potenciar el impacto de los programas.
- La participación activa de las comunidades en el diseño e implementación de iniciativas educativas.
- La mejora continua de la calidad de la oferta educativa, particularmente en las zonas vulnerables rurales y urbanas.

Alcanzar las metas de cobertura y calidad educativa en comunidades vulnerables requiere una inversión adicional del PIB anual durante los próximos seis años. Los retornos sociales y económicos proyectados incluyen una reducción de la pobreza intergeneracional en las comunidades beneficiarias. Esta estrategia integral permitiría avanzar hacia el cumplimiento del ODS 4 dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, garantizando mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes mexicanos.

Ciudadanía y educación para la sostenibilidad y el desarrollo

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) representa un pilar fundamental en la transformación de los sistemas educativos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Según el informe de la UNESCO (2021), la urgencia de esta transformación se evidencia en la necesidad de una triple transición hacia economías verdes, inclusivas y digitales antes de 2050, un objetivo que requiere una reformulación profunda de nuestros modelos educativos.

Este enfoque trasciende la simple incorporación de contenidos ambientales al currículo para proponer una reconceptualización integral de los propósitos y prácticas educativas.

La implementación efectiva de la EDS requiere un marco institucional que articule políticas educativas nacionales con compromisos internacionales de sostenibilidad. La UNESCO ha identificado que los países que han integrado sistemáticamente la EDS en sus sistemas educativos muestran mejoras significativas en indicadores de conciencia ambiental y participación ciudadana en iniciativas de sostenibilidad. Por ejemplo, los estudiantes que participan en programas de EDS tienen tres veces más probabilidades de involucrarse en proyectos comunitarios relacionados con la sostenibilidad.

La implementación de la EDS requiere una transformación integral que va más allá de la inclusión nominal de contenidos sobre sostenibilidad en los programas educativos. Para abordar estos desafíos, es fundamental desarrollar estrategias multinivel que incluyan: el fortalecimiento de la formación docente en competencias para la sostenibilidad, la actualización curricular con enfoque en problemas socioambientales locales y globales, y la creación de infraestructura educativa sostenible.

Junto con la EDS, la UNESCO plantea una reflexión relevante sobre la formación ciudadana internacional en México, destacando la brecha entre las aspiraciones y la realidad educativa. La UNESCO identifica un desafío fundamental: enseñar a "vivir juntos" en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Esta necesidad se hace más urgente ante el creciente desencanto juvenil con la política tradicional y su preocupación por conflictos globales, crimen organizado y violencia escolar. Como respuesta, se promueve la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM), un enfoque que busca desarrollar un sentido de pertenencia global y compromiso con los derechos humanos.

México ha incorporado elementos de ciudadanía global en materias como Formación Cívica, Lengua, Geografía e Historia. La Nueva Escuela Mexicana vincula lo local con lo global mediante ejes articuladores. Sin embargo, el rechazo de la SEP al marco completo de la ECM limita su implementación efectiva en prácticas docentes y materiales educativos, a pesar de ser un compromiso adquirido en la Agenda 2030.

Las propuestas presentadas buscan fortalecer la formación ciudadana global mediante acciones concretas: incorporar la ECM en la legislación educativa, actualizar planes de estudio y formación docente, promover intercambios universitarios internacionales, y fomentar el diálogo intercultural a través de las artes. Destaca especialmente la necesidad de involucrar a los medios de comunicación en la promoción de valores ciudadanos globales.

Este enfoque educativo resulta particularmente relevante en un contexto donde los desafíos globales requieren ciudadanos capaces de comprender y actuar más allá de las

fronteras nacionales, manteniendo simultáneamente un fuerte arraigo en su identidad cultural local.

Desarrollo profesional docente

La calidad de las y los docentes es un factor central para mejorar el aprendizaje y transformar la educación en México. Más allá de la infraestructura o los recursos tecnológicos, las prácticas pedagógicas tienen un impacto decisivo en el desarrollo de las y los estudiantes. De hecho, según estudios previos del INEE (Treviño Villarreal & Treviño González, 2004), el desempeño docente puede explicar una considerable variación en los resultados académicos de las y los estudiantes.

En este contexto, garantizar un salario digno y competitivo para las y los docentes es crucial. El salario promedio anual de las y los maestros de educación básica en México es de aproximadamente \$180,000 pesos, equivalente a \$10,500 USD. Esta cifra está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que ronda los \$34,000 USD según el informe *Education at a Glance 2023*. Esta diferencia no solo afecta la calidad de vida del personal docente, sino que también reduce el atractivo de la profesión. Entre 2015 y 2023, la matrícula de las escuelas normales disminuyó un 23%, según datos de la SEP, reflejando un desinterés creciente por la carrera docente.

La formación docente en México enfrenta retos significativos, como lo demuestran los informes recientes de Mejoredu. Según los *Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México (2023)*, el panorama educativo refleja disparidades en la preparación continua de docentes, destacando la necesidad de programas contextualizados y accesibles para fortalecer sus competencias en áreas clave, como el diseño curricular y la gestión del aula. Por otro lado, el informe *Las y los docentes de educación media superior: características sociodemográficas, profesionales y condiciones institucionales (2023)* señala que, aunque la mayoría de los docentes consideran relevante la formación continua, enfrentan obstáculos como la falta de tiempo, recursos tecnológicos limitados y una percepción de irrelevancia en la oferta formativa actual. Este análisis enfatiza la urgencia de diseñar políticas educativas que respondan a las necesidades específicas del personal docente, promoviendo trayectorias de desarrollo profesional más robustas y alineadas con los retos del sistema educativo nacional.

Fomentar la innovación pedagógica también es fundamental. Según el informe de MEJOREDU (2023) sobre docencia en educación media superior, 62.9% de los docentes de educación media superior identificó como prioridad formarse en metodologías activas y participativas que promuevan la indagación, investigación y vinculación de contenidos a la vida cotidiana.

Además, el acceso a tecnologías digitales sigue siendo desigual en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en

los Hogares (ENDUTIH 2023) del INEGI, en 2023, el acceso a internet en los hogares mexicanos mostró marcadas disparidades que afectan directamente las oportunidades educativas. Mientras que en entidades como la Ciudad de México el 89.5% de los hogares disponían de internet, en estados como Oaxaca y Guerrero este porcentaje se redujo al 53.0% y 53.9%, respectivamente. Estas cifras dificultan el acceso a internet para aprovechar recursos educativos digitales y participar en la educación en línea. Además, la diferencia entre zonas urbanas y rurales agrava esta brecha: en el ámbito urbano, el 85.5% de la población utilizaba internet, frente al 66.0% en el ámbito rural

Invertir en la calidad docente es una apuesta segura para el futuro del país. Más allá de mejorar indicadores, esta inversión tiene el potencial de transformar vidas, cerrar brechas y construir una sociedad más equitativa y preparada.

Mejora de la infraestructura y el currículum digital

La transformación digital del sistema educativo mexicano representa un desafío fundamental que requiere una estrategia integral y coordinada. La brecha digital no solo limita el acceso a oportunidades educativas, sino que también perpetúa y amplía las desigualdades socioeconómicas existentes.

Respecto al servicio de internet, por ejemplo, según datos de Mejoredu (2023), algunas entidades destacan como las entidades con menor conectividad: Chiapas (6.1%), Oaxaca (9.3%) y Guerrero (10.8%) en escuelas, mientras que Guanajuato (95.3%), Baja California (96.2%) y Aguascalientes (96.9%) presentan los niveles más altos. Estas diferencias reflejan las inequidades persistentes en el acceso a recursos tecnológicos básicos, que afectan directamente las oportunidades educativas en las regiones más marginadas del país.

La ampliación de la conectividad en zonas rurales y marginadas requiere un enfoque multisectorial. Se ha identificado modelos exitosos que combinan inversión pública, participación privada y colaboración comunitaria. Por ejemplo, el programa "Internet para Todos" en Perú logró incrementar la conectividad rural en tres años mediante alianzas público-privadas y el uso de tecnologías innovadoras como la conectividad satelital y las redes mesh² (Margot & Cabañas, 2022).

En cuanto al desarrollo de contenidos y plataformas educativas digitales, es importante que estas sean accesibles, culturalmente pertinentes y pedagógicamente efectivas.

² Una red mesh es un sistema de conexión de dispositivos en el que todos los puntos de acceso están interconectados, formando una estructura similar a una telaraña. Este diseño permite que los datos viajen de un punto a otro utilizando diferentes rutas, lo que garantiza una conexión estable y confiable, incluso si alguno de los puntos falla.

Los estudios muestran que las plataformas exitosas comparten características clave: son multilingües, permiten el acceso sin conexión, se adaptan a diferentes dispositivos y contextos de uso, y proporcionan retroalimentación personalizada.

La capacitación docente en competencias digitales emerge como un elemento crítico. El marco de referencia de la UNESCO (2019) establece seis áreas fundamentales de competencia digital docente: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas y pensamiento computacional.

La experiencia internacional demuestra que las inversiones en infraestructura digital deben ir acompañadas de estrategias de desarrollo profesional sostenidas. Por ejemplo, Corea ha asignado aproximadamente 740 millones de dólares durante tres años (2024-2026) específicamente para la formación de docentes como parte de su inversión más amplia en educación basada en inteligencia artificial (Asim, Kim, & Aedo, 2024).

Para México, la implementación efectiva de esta transformación digital requiere una inversión significativa y sostenida. Se estima que alcanzar una cobertura digital universal en el sistema educativo requeriría una inversión equivalente al 1.5% del PIB durante los próximos cinco años. Sin embargo, los beneficios potenciales son sustanciales: estudios del Banco Interamericano de Desarrollo sugieren que reducir la brecha digital podría 15 millones de empleos directos en América Latina (BID, 2021)

La transformación digital del sistema educativo mexicano no es solo una necesidad técnica sino un imperativo social para garantizar la equidad y la calidad educativa en el siglo XXI.

Fortalecimiento del sistema de evaluación integral

La implementación de un sistema de evaluación integral y basado en evidencias es fundamental para la mejora continua del sistema educativo mexicano. La UNESCO ha enfatizado que la evaluación no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para la toma de decisiones informadas que conduzcan a una educación de mayor calidad y equidad.

Los datos históricos de participación de México en evaluaciones internacionales muestran su valor estratégico. Por ejemplo, la última participación de México en el ERCE (2019) reveló que, si bien los estudiantes mexicanos de sexto grado obtuvieron resultados por encima del promedio regional en matemáticas y lectura, existían brechas significativas entre diferentes grupos socioeconómicos. Específicamente, la diferencia en el desempeño entre estudiantes del quintil más alto y más bajo de nivel socioeconómico era de 115 puntos en matemáticas, equivalente a casi dos años de escolaridad.

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE, 2023) ha documentado que los países que mantienen una participación consistente en evaluaciones regionales han logrado implementar mejoras más efectivas en sus sistemas educativos. Por ejemplo, Chile y Uruguay, que han participado en todos los ciclos del ERCE, han logrado reducir sus brechas de aprendizaje durante la última década.

La ausencia de México en el ERCE 2022 ha limitado la capacidad del país para evaluar el impacto real de la pandemia en los aprendizajes.

La participación de México en el ERCE 2025 representa una oportunidad estratégica para fortalecer nuestro sistema educativo. Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de evaluar las habilidades socioemocionales de las y los estudiantes, un componente que cobra especial importancia tras la pandemia. Se estima que el 45% de las y los estudiantes han enfrentado algún tipo de afectación socioemocional que ha impactado en su aprendizaje. Incorporar este tipo de evaluación ayudaría a identificar estas necesidades y diseñar estrategias para abordarlas, mejorando no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar integral de las y los estudiantes.

Además, participar en el ERCE 2025 permitiría comparar nuestra situación educativa con la de otros países que enfrentan desafíos similares. Esta comparabilidad es esencial para identificar prácticas efectivas y adaptarlas al contexto mexicano. Aprender de las experiencias de otras naciones nos brinda herramientas valiosas para fortalecer nuestras propias políticas y programas educativos.

Otro beneficio clave sería contar con datos robustos sobre el impacto de las políticas educativas implementadas durante la post-pandemia. Actualmente, existe un vacío significativo en la medición de iniciativas y estrategias de recuperación de aprendizajes. Este tipo de información es crucial para evaluar su efectividad y hacer los ajustes necesarios para maximizar sus resultados.

Sin embargo, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es necesario construir un sistema de evaluación integral que combine la participación en evaluaciones internacionales con el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales. Esto implica retomar los aprendizajes que el país ha logrado en este punto y aprovechar los recursos humanos y técnicos que se han formado en 20 años de evaluación educativa sistémica en México.

Un enfoque integral de este tipo es indispensable para alcanzar las metas de calidad y equidad educativa que establece el ODS 4, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Al priorizar una evaluación educativa bien diseñada, México puede avanzar hacia un sistema que garantice mejores oportunidades de aprendizaje para todas y todos.

Desafíos estructurales

Gobernanza y descentralización

El sistema educativo mexicano enfrenta retos significativos en su gobernanza y estructura descentralizada que impactan directamente la calidad y equidad educativa. La pandemia reveló una paradoja en la gestión educativa: mientras evidenció la necesidad de respuestas locales adaptativas, en la práctica fortaleció la centralización en la toma de decisiones.

El principio de subsidiariedad, que promueve la toma de decisiones en el nivel más cercano a la implementación, ha mostrado resultados positivos en diversos contextos. Brasil ejemplifica cómo una descentralización educativa efectiva, acompañada de mecanismos de compensación interestatal, puede reducir significativamente las brechas de calidad entre regiones.

La evidencia internacional sugiere que las escuelas con mayor autonomía en decisiones sobre recursos humanos, presupuesto y adaptación curricular logran mejoras sustanciales en el aprendizaje, alcanzando incrementos importantes en comparación con escuelas bajo control centralizado.

La participación comunitaria emerge como un factor crucial para la transformación educativa. Los sistemas más resilientes son aquellos que integran efectivamente a escuelas, familias y comunidades en la toma de decisiones, logrando mejoras significativas en asistencia escolar y reducción del abandono.

Para implementar una descentralización efectiva, México necesita:

1. Fortalecer los sistemas de información y gestión educativa para facilitar decisiones basadas en evidencia a nivel local
2. Desarrollar las capacidades de liderazgo educativo en gestión escolar autónoma
3. Establecer mecanismos de rendición de cuentas que equilibren autonomía y responsabilidad por resultados

La transición hacia un sistema descentralizado requiere una inversión sostenida en capacidades locales y un marco regulatorio claro que defina roles y responsabilidades en cada nivel del sistema. Este enfoque permitiría avanzar hacia un modelo educativo más equitativo y eficiente, capaz de responder efectivamente a las diversas necesidades de las comunidades educativas mexicanas.

La construcción de capacidades institucionales locales sólidas resulta fundamental para el éxito de esta transformación. Esto implica no solo reformas normativas, sino también el desarrollo de competencias técnicas y administrativas en las autoridades educativas

estatales. La experiencia internacional demuestra que los sistemas más exitosos combinan una dirección estratégica centralizada con amplia autonomía en la implementación local.

Financiamiento y sostenibilidad

El análisis del presupuesto educativo revela limitaciones estructurales significativas. La asignación presupuestaria presenta restricciones que pueden impactar el desarrollo del sistema educativo nacional. Más allá de los números, estas limitaciones tienen un impacto real en las oportunidades de aprendizaje de millones de niñas, niños y jóvenes en el país. Es necesario analizar estas cifras con sensibilidad y desde una perspectiva de política pública que priorice a las personas.

Un punto preocupante es la brecha entre la inversión prometida y la realidad. La Ley General de Educación establece que se debe destinar el 8% del PIB a la educación, pero en 2023 apenas se alcanza el 2.9%. Esta diferencia no solo va en contra de nuestra propia legislación, sino que también nos aleja de las recomendaciones internacionales, como las del Marco de Acción de Educación 2030, que sugieren entre un 4% y un 6% del PIB. Esta disparidad pone en riesgo objetivos fundamentales, como asegurar una educación inclusiva y de calidad.

Cuando se revisan programas específicos, el panorama tampoco es alentador. Por ejemplo, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que apoya a las familias más vulnerables, apenas tuvo un aumento real del 0.2%. Con esto, no solo se limita su capacidad de atender a más estudiantes, sino que el incremento ni siquiera compensa los efectos de la inflación, reduciendo su impacto positivo en las comunidades.

Además, la manera en que se distribuyen los recursos también genera desafíos. El 94% del presupuesto educativo se concentra en solo dos entidades: el Ramo 33 y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto centraliza los recursos y dificulta responder de manera ágil y efectiva a las necesidades específicas de las distintas regiones y comunidades del país. Un aspecto crítico es que gran parte del gasto en el Ramo 33 se destina a nómina, dejando poco margen para invertir en otras áreas clave, como infraestructura, formación docente o materiales educativos.

Un análisis más amplio muestra que, en comparación con 2019, los recursos dirigidos a la infancia han disminuido un 1.9% en términos reales. Esta tendencia es preocupante, especialmente cuando sabemos que las necesidades del sector educativo siguen creciendo.

Por otro lado, es justo reconocer iniciativas como el programa La Escuela es Nuestra, que tuvo un aumento significativo del 84.6%. Sin embargo, aún enfrenta desafíos importantes, como la falta de mecanismos claros para su implementación, supervisión y

rendición de cuentas. Esto podría limitar su efectividad y el impacto esperado en las comunidades escolares.

Es indispensable replantear cómo se asigna y utiliza el presupuesto educativo para garantizar que realmente fortalezca el sistema y permita cumplir con su misión: ofrecer a todas y todos una educación digna, inclusiva y de calidad.

Conclusiones sobre los desafíos de la nueva administración

La nueva administración enfrenta un momento crucial para redefinir prioridades y consolidar una estrategia integral que aborde los desafíos estructurales del sistema educativo mexicano. Este contexto presenta la oportunidad de cerrar brechas históricas, pero también exige claridad, compromiso y acción decidida.

Uno de los retos principales es superar las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables. La brecha digital, la pobreza y las disparidades en el acceso a la educación siguen siendo barreras críticas que limitan el potencial de miles de estudiantes. La conectividad en zonas rurales y marginadas es una tarea pendiente, ya que, sin una infraestructura tecnológica adecuada, será difícil garantizar oportunidades equitativas en un mundo cada vez más digitalizado.

En el ámbito pedagógico, la formación docente debe ser una prioridad. La actualización en competencias digitales, educación socioemocional y estrategias inclusivas es indispensable para enfrentar los retos del siglo XXI. Sin embargo, la capacitación docente no puede ser un esfuerzo aislado; debe integrarse dentro de una política educativa coherente que valore y dignifique la profesión docente, asegurando condiciones laborales justas y competitivas.

Además, es crucial reforzar los aprendizajes fundamentales en áreas como matemáticas y lengua, especialmente tras los retrocesos causados por la pandemia. Aunque la innovación pedagógica es importante, esta no debe comprometer las bases educativas esenciales que son el cimiento para el aprendizaje continuo.

La gobernanza del sistema educativo también requiere atención urgente. La descentralización efectiva y la participación comunitaria son elementos clave para responder a las necesidades locales. Sin embargo, esto implica fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión en los niveles estatales y municipales, garantizando transparencia y rendición de cuentas en la asignación y uso de recursos.

El financiamiento educativo es otro desafío crítico. La brecha entre el presupuesto real y lo establecido por la ley refleja un rezago que limita la implementación de programas

clave y el mantenimiento de la infraestructura escolar. La administración entrante debe establecer mecanismos claros para garantizar que los recursos lleguen de manera eficiente y equitativa a donde más se necesitan.

Por último, el contexto global exige una visión más amplia. Integrar la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial en el currículo es una oportunidad para preparar a las y los estudiantes no solo como ciudadanos locales, sino también como agentes de cambio en un mundo interconectado.

La transformación educativa no será posible sin un esfuerzo colectivo que involucre a todos los actores sociales. Esta administración tiene en sus manos la posibilidad de construir un sistema más inclusivo, equitativo y preparado para los retos del futuro.

Nota metodológica

El presente documento retoma y discute las ideas del texto *Transformar la educación para lograr el desarrollo sostenible y un futuro de paz, justicia y prosperidad. Visión y propuestas para México 2024-2030*. Para ello se revisaron fuentes adicionales. Se utilizó inteligencia artificial (ChatGPT y Claude) para resumir textos, identificar ideas principales y pulir la redacción final del artículo.

Referencias

- Asim, S., Kim, H., & Aedo, C. (2024, October 30). Teachers are leading an AI revolution in Korean classrooms. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2021, junio 23). Cerrar la brecha digital podría crear 15 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://www.iadb.org/es/noticias/cerrar-la-brecha-digital-podria-crear-15-millones-de-empleos-en-america-latina-y-el-caribe>
- Banco Mundial, UNESCO, & UNICEF. (2021). El estado de la crisis educativa mundial: un camino hacia la recuperación. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/12/06/learning-losses-from-covid-19-could-cost-this-generation-of-students-close-to-17-trillion-in-lifetime-earnings>
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). (2023). Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México. Edición 2023: Cifras del ciclo escolar 2021-2022. Mejoredu. www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores-nacionales-2023.pdf
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). (2023). Las y los docentes de educación media superior: Características sociodemográficas, profesionales y condiciones institucionales. Mejoredu. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/las_y_los_docentes_de_ems_c_spci_informe.pdf
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2023). Medición multidimensional de la pobreza en México 2016-2022. Ciudad de México: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2016_2022.pdf
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2023). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022. Ciudad de México: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/IEPDS_2022.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023*. Recuperado de www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf

- Margot, D., & Cabañas, E. L. (2022, June 15). Transforming a region with Internet for All. IDB Invest. <https://idbinvest.org/en/blog/digitization-and-connectivity/transforming-region-internet-all>
- Organización de Estados Iberoamericanos. (2021). Efectos en la Educación iberoamericana: un año después de la COVID-19. Recuperado de <https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/seran-necesarios-11-anos-para-recuperar-el-aprendizaje-perdido-debido-al-impacto-de-la-pandemia-en-iberoamerica/>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. París, Francia: OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2023_e13bef63-en.html
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2023). *Anuario estadístico de la educación básica en México*. Ciudad de México, México: SEP.
- Treviño Villarreal, E., & Treviño González, G. I. (2004). Estudio sobre las desigualdades educativas en México: La incidencia de la escuela en el desempeño académico de los alumnos y el rol de los docentes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P1C105.pdf
- UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO. París, Francia: UNESCO. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024>
- UNESCO. (2024). El precio de la inacción. El costo global privado, fiscal y social de que los niños, niñas y jóvenes no aprendan. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390193_spa
- UNESCO. (2024). Transformar la educación para lograr el desarrollo sostenible y un futuro de paz, justicia y prosperidad. Visión y propuestas para México 2024-2030.
- UNICEF México. (2023). Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2023: Análisis general de la inversión destinada a niñas, niños y adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.org/mexico/media/7461/file/Proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202023.pdf>

Acerca de la autora

Leslie Serna Hernández, Integrante de MUxED. Socióloga con doctorado en educación social, es consultora independiente, y colabora desde 2003 con Valora Consultoría A.C. y desde 2021 con la UNESCO. Sus áreas de interés y experiencia son la evaluación de intervenciones educativas, el desarrollo de habilidades digitales y la formación para el desarrollo personal.